

Violencia hacia las mujeres privadas de libertad: cuando la discriminación se multiplica

Violence Against Incarcerated Women: When Discrimination Multiplies

Marcela Aedo Rivera *

RESUMEN

El objetivo principal del presente trabajo es caracterizar la discriminación y las múltiples violencias que viven las mujeres privadas de libertad, incluso desde antes de su ingreso a prisión. Y cómo respecto de ellas se han construido y operado un conjunto de prejuicios y estereotipos que erosionan su dignidad y su calidad de sujetos de derecho, lo que impacta profundamente en el acceso a la justicia.

Para ello se hacen algunas consideraciones sobre como la discriminación es una manifestación de la violencia en los términos de la CEDAW. Luego se desarrollan algunas reflexiones sobre el sistema de justicia penal desde la perspectiva de la criminología feminista. A continuación se presentarán algunas características específicas de las mujeres encarceladas en Chile, y se reflexiona sobre la debilitada o ausente perspectiva de género en el sistema penitenciario nacional.

Palabras clave: Violencia, mujeres privadas de libertad, discriminación, estereotipos.

ABSTRACT

The main objective of this paper is to characterize the discrimination and multiple forms of violence experienced by women deprived of their liberty, even before their admission to prison. A set of prejudices and stereotypes have been constructed and operated with regard to them, eroding their dignity and their status as subjects of law, which has a profound impact on their access to justice. To this end, some considerations are made on how discrimination is a manifestation of violence in the terms of CEDAW. Then some reflections on the criminal justice system are developed from the perspective of feminist criminology. Next, some specific characteristics of women incarcerated in Chile are presented, followed by a reflection on the weakened or absent gender perspective in the national prison system.

Keywords: Violence, women deprived of liberty, discrimination, stereotypes.

* Universidad de Valparaíso

marcela.aedo@uv.cl

Fecha de recepción: 18/08/2025

Fecha de aceptación: 04/11/2025

1. Introducción

Como ha señalado Encarna Bodelón: “La situación de las mujeres en las prisiones es un tema que también puede ser estudiado partiendo de cuáles son los efectos de la violencia patriarcal, de la desigualdad de las relaciones de género en la vida de las mujeres presas. Las dificultades, problemas, vulneraciones de sus derechos pueden entenderse como una consecuencia más de las condiciones carcelarias. Sin embargo, esas vulneraciones tienen una lectura que las sitúa en la dinámica de la desigualdad sexual. Las particularidades del encarcelamiento femenino se deben a que la lógica punitiva tiene género, el castigo está marcado por las relaciones de género, por uno de los grandes vectores de dominación de nuestras sociedades” (2012, p.111).

Asimismo, para comprender la discriminación y los procesos de violencia que sufren las mujeres en prisión, tenemos que recordar, por una parte, cómo sus trayectorias de vida se caracterizan por la alta prevalencia de violencias vividas desde su primera infancia (Aedo, 2023, p.333), y, por otra, de qué manera se han construido los estereotipos y los prejuicios sobre las mujeres que cometen delitos y que se encuentran privadas de su libertad, ya que dicha construcción está atravesada por estructuras de género (Bodelón, 2012, p.112).

En este marco de análisis, el objetivo principal del presente trabajo es caracterizar la discriminación y las múltiples violencias que viven las mujeres privadas de libertad, incluso desde antes de su ingreso a prisión. Y cómo respecto de ellas han operado un conjunto de prejuicios y estereotipos que erosionan su dignidad y su calidad de sujetos de derecho, lo que impacta profundamente en limitar su acceso a la justicia.

Para ello, se parte de algunas consideraciones previas sobre cómo la discriminación hacia las mujeres privadas de libertad es una manifestación de la violencia en los términos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante, Convención Belém Do Pará). Luego se presentan algunas características generales de las mujeres privadas de libertad en América Latina. Para continuar con algunas reflexiones sobre el sexismo en el sistema de justicia penal, que nos permitan comprender como se ha construido la imagen de la “mujer delincuente” y como ello tiene lugar en un sistema penitenciario que históricamente las ha invisibilizado y/o las ha estereotipado. A continuación, se presentarán algunas características específicas de las mujeres encarceladas en Chile, y se identifican algunas de sus principales

problemáticas a la luz de un Estudio elaborado por la Defensoría Penal Pública (en adelante, DPP) y Eurosocietal. Se reflexiona sobre la debilitada o ausente perspectiva de género en el sistema penitenciario nacional y se presentan algunos casos jurisprudenciales que han abordado la violencia de mujeres privadas de libertad.

2. Consideraciones previas sobre violencia contra la mujer y discriminación¹

Desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, en los términos de la CEDAW². El artículo 1º de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad (1992: párrafo 6)

Es decir, la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del Derecho Internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, en los términos del artículo 1º de la CEDAW³ (1992: párrafo 7).

Asimismo, la Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas. Esos actos de violencia también pueden constituir una violación de las obligaciones del Estado en virtud del Derecho Internacional sobre derechos humanos u otros convenios, además de violar la Convención (1992: párrafo 8).

En este sentido, y en relación a las mujeres privadas de libertad, resulta relevante la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” de septiembre de 1994⁴ que señala expresamente que la violencia contra la mujer también comprende aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (Artículo

¹ Sobre el particular me he referido con mayor profundidad sobre las adolescentes privadas de libertad en Aedo (2023).

² Ratificada por Chile el 7 de diciembre de 1989 y publicada en el Diario Oficial el 9 de diciembre de 1989.

³ El artículo 1 de la CEDAW señala: “*A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera*”.

⁴ Ratificada por Chile el 24 de octubre de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 11 de Noviembre de 1998.

2º, letra c) e impone a los Estados el deber de velar porque las autoridades y agentes estatales se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer (Artículo 7º).

Como señala Valenzuela (2020) la CEDAW reconoce la discriminación en términos estructurales o de sistemas. Con ello, ésta hace eco del feminismo jurídico radical en el plano internacional de los Derechos Humanos, al sugerir “el valor de transformar el mundo masculino de los derechos, que se hacen pasar por “humanos”, ampliándolo para que incluya la protección contra todas las formas de subordinación basadas en el género” (Charlesworth, 1997, p.64). Así, la discriminación se comprende ahora bajo la fórmula: “a) que no es el sexo en abstracto, sino en todo caso, el sexo femenino el discriminado; y b) que el sexo *no* constituye sólo *un factor más* de discriminación, sino que, en tanto divide a la humanidad en dos, en las mujeres constituye un *plus* de los que pueden afectar a los hombres” (Barrère, 2014, p. 115.).

En un sentido similar, Mestre señala que el feminismo, “conceptualiza la violencia contra las mujeres como discriminación porque parte de un concepto de discriminación en términos de jerarquización injusta del poder (dominio-subordinación) basado en el sistema sexo-género: la violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación porque representa una manifestación de la ruptura de la regla de igualdad intergrupal” (Mestre, 2017, p.207-208).⁵

3. Las mujeres privadas de libertad: algunos datos en el contexto de América Latina

Tal como sucede a nivel mundial, en América Latina las mujeres privadas de libertad constituyen una minoría que históricamente ha sido invisibilizada (Almeda, 2001; Almeda y Bodelón, 2007). En términos generales “la infraestructura, la gestión penitenciaria, los programas de educación, capacitación y los espacios laborales han sido históricamente diseñados con una visión androcéntrica, que escasamente considera las historias vitales de las mujeres y sus necesidades” (Pérez, 2017, p.86).

De acuerdo a la “Lista Mundial de Encarcelamiento femenino hay más de 700.000 mujeres privadas de libertad en el mundo. En el 80% de los sistemas penitenciarios las mujeres representan entre un 2% y un 9% de la población penal (Pérez, 2017, p.86) y desde el año 2000 hasta el año 2021, según los

⁵ Para analizar más detalladamente por qué conceptualizar la violencia contra las mujeres como discriminación y qué concepción sobre la discriminación es idónea para explicar y comprender la violencia contra las mujeres desde el prisma de los derechos humanos, véase Añón (2021) y Valenzuela (2020).

datos de *World Female Imprisonment List* el número de mujeres y niñas en prisión se ha incrementado aproximadamente en un 60%, mientras que la población masculina ha crecido un 22%⁶.

América Latina sigue la tendencia señalada. De acuerdo al informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) el año 2023, sobre las Mujeres privadas de libertad en las Américas “a pesar de que las mujeres encarceladas continúan representando una proporción pequeña del total de personas privadas de libertad -8% en la región-, durante los últimos años se han elevado sus niveles de encarcelamiento. Ello deriva principalmente del endurecimiento de políticas criminales en materia de drogas y de la falta de perspectiva de género para abordar la problemática, al no considerar factores como: i) bajo nivel de participación dentro de la cadena delictiva; ii) ausencia de violencia en la comisión de estas conductas; iii) impacto diferencial de su encarcelamiento respecto de las personas a su cargo; iv) ausencia de enfoque de reinserción social en las políticas penitenciarias; y v) situación de violencia y exclusión a la que se enfrentan en la región. Además, la CIDH advirtió que las mujeres detenidas en las Américas se enfrentan a afectaciones desproporcionadamente graves debido a la falta de atención a las necesidades específicas derivadas de su género.” (CIDH, 2023, p.8)

Asimismo, se advierte que, en Latinoamérica y el Caribe en general, los delitos por los que las mujeres son encarceladas están, en su inmensa mayoría, “relacionados con la producción, tráfico y expendio de drogas prohibidas, en general, en las funciones de menor jerarquía dentro de las organizaciones dedicadas a la comisión de estos delitos...” (Carranza, 2012, p.38). Y como se ha señalado, el proceso de criminalización por este tipo de delitos ha importado un crecimiento de la población de mujeres privadas de libertad en la región. Por ejemplo, en América Latina en solo 6 años (entre 2006 y 2011), la población reclusa femenina casi se duplicó (paso de 40.000 a más de 74.000 mujeres) y sigue creciendo en la actualidad. (Almeda y Dinella, 2017).

Por último, las problemáticas y necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad en general se replican en la región. Algunos aspectos señalados son, la falta de centros propios para mujeres, expuestas a abusos, apartadas de sus lugares de residencia y dada la escasez de recursos, raramente son visitadas por su familia, la falta de atención a los problemas de salud mental, la menor oferta de

⁶ <https://www.prisonstudies.org/news/world-female-prison-population-60-2000>

oportunidades educativas, laborales y de capacitación, entre otros. (Consortio Internacional sobre Políticas de Drogas, 2013 y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Chile⁷, 2013).

4. Algunas reflexiones sobre el sistema de justicia penal desde las criminologías feministas⁸

Desde sus orígenes, el poder punitivo ha sido un poder con implicaciones de género, es decir, se ha estructurado en la dominación y subordinación de la mujer (Antony, 2005, p.12).

En esta línea, Zaffaroni señala dos momentos representativos del poder punitivo vinculados con su consagración en la Edad Media y su resurgimiento a mediados del siglo XIX (1993, p. 93).

En efecto, en un primer momento durante la Edad Media “la posición subordinada de la mujer se acentuó y consolidó con el modelo corporativo de sociedad, y el instrumento de éste fue el poder punitivo –con sus marchas y contramarchas– hasta los siglos XI y XII, con la inquisición” (Zaffaroni, 1993, p. 94) y cuyo discurso legitimador lo podemos encontrar en la obra de los dominicos Heinrich Kramer y James Sprenger, el *Malleus Maleficarum* o El martillo de las Brujas de 1484 consagrada oficialmente por el Papado, y que corresponde a la primera teorización extensa y detallada del modelo integrado de la criminología etiológica, derecho penal, procesal penal y criminalística (Zaffaroni, 1993, p.94).

Esta guía oficial de la caza de brujas se refiere insistentemente a la mujer y justifica su comportamiento desviado desde su inferioridad y peligrosidad (Antony, 2005, p. 12).

Inferioridad que, según esta guía, se originaría en su propia genética: “La razón natural está en que la mujer es más carnal que el hombre, lo que se evidencia por sus muchas abominaciones carnales. Y conviene afirmar que hubo una falla en la formación de la primera mujer, por haber sido ella creada a partir de una costilla curva, o sea, una costilla del pecho cuya curvatura es, por así decir, contraria a la rectitud del hombre. Y como, en virtud de esa falla la mujer animal imperfecto, siempre decepciona y miente” (Zaffaroni, 1993, p.95).

⁷ En adelante, Minjusticia.

⁸ Cabe señalar, que “si queremos delinear los conceptos feministas de justicia, deberemos primero admitir que después del inicio de los años sesenta se han desarrollado múltiples teorías feministas. Por ello no debíamos hablar de feminismo como una perspectiva dentro de la criminología, sino más bien de criminologías feministas” (Van Swaaningen, 1989, p.89).

La Inquisición al seguir estos planteamientos “explicaba que esta debilidad en la mujer es la que induce a prácticas de hechicería y brujería, justificando así la severa persecución contra las brujas llevándolas a la hoguera” (Antony, 2005, p.13).

Pero como señala Antony, “no solamente las brujas fueron objeto de represión, también lo fueron las mujeres prostitutas, las ebrias, las mendigas, las mujeres sin oficio o solteras, las independientes, las sexualmente activas o simplemente las que conocían las prácticas curativas”, es decir las diferentes o desviadas, que contravenían el arquetipo femenino de humildad, discreción, pureza subordinación, aislamiento, piedad y templanza (2005, p. 14-15).

Desde la perspectiva religiosa, estas mujeres deberán ser tuteladas bajo parámetros de corrección moral, lo que abre las puertas a la ideología tutelar que cubrirá con especial atención el tratamiento penal de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

El segundo momento de resurgimiento del poder punitivo al que se ha hecho alusión, se ubicaría en el contexto del nuevo discurso “científico” positivista (segunda mitad del siglo XIX) que desarrolla diversas teorías que buscarían “justificar científicamente las desigualdades sociales como necesaria diversidad natural” (Pavarini, 1983, p. 41).

Será Cesar Lombroso -uno de los mayores representantes de la Escuela Positiva Italiana- quien tratará de dar una de las primeras explicaciones al comportamiento delictivo de la mujer, en su obra *La Donna Delinquente*, escrito junto a su cuñado Giovanni Ferrero en el año 1892.

Los autores sostienen que la mujer tiene una mayor pasividad, lo que viene determinado fisiológicamente. Por ello, serían más obedientes a la ley, lo que explicaría su baja participación en hechos delictivos. Al mismo tiempo, son potencialmente amorales, es decir, engañosas, frías, calculadoras, seductoras y malévolas (Van Swaaningen, 1989, p. 85-86).

Y en el caso de las mujeres, la teoría del atavismo lombrosiano no las conduciría a cometer delitos sino a la prostitución, lo que constituiría, para estos autores, la forma obvia de desviación femenina (Antony, 2005, p.22).

El concepto de la verdadera naturaleza de la mujer es absolutamente fundamental en la obra de Lombroso y Ferrero, “de modo que cualquier característica social de la mujer es reflejo de su naturaleza” (Miralles, 1983, p.123).

En este sentido, cada una de las características atribuidas a la prostituta deviene contra la naturaleza femenina. Así, Lombroso destacó de la prostituta “su frigidez, su mayor virilidad, su carencia de sentimientos maternales, el temor a la gravidez, la ociosidad, generalmente de clase pobre, amantes del adulterio, desordenadas de vida social pervertida, malsano gusto por los placeres y el vicio...” (Lombroso, 1903, en Antony, 2005, p.22).

De este modo, a partir del estudio de Lombroso y Ferrero, la mujer delincuente es vista como biológicamente anormal no solamente porque es “rara”, sino que no es una mujer completa. Y de ahí se desprende un doble oprobio: la condena legal por el delito y la condena social por la anormalidad biológica o sexual. Los autores italianos llegan a afirmar que “Por ser una doble excepción la mujer criminal es un monstruo” (Miralles, 1983, p. 124).

A pesar de las críticas planteadas a las explicaciones lombrosianas, la base determinista de carácter biológica presente en esta primera teoría es recogida y refinada en posteriores desarrollos teóricos. Como señalan Meda Chesney Lind y Randall G. Shelden: “Si bien muchas teorías del crimen cometido por hombres comenzaron gradualmente a incluir otros factores, las teorías sobre el crimen femenino continuaron por muchos años centrándose exclusivamente en la anatomía, y particularmente en su sexualidad” (2004, p. 101).

Lo más preocupante en este sentido es la manera en que determinadas teorías “científicas” de la delincuencia femenina –que presentan mayor interés en las técnicas de control que en la emancipación o liberación, y enfatizan la naturaleza biológica y patológica de las infracciones penales– pueden haber influido y/o legitimado las conceptualizaciones de los responsables políticos de tal modo que la delincuencia femenina es, o sigue siendo interpretada como una enfermedad biológicamente arraigada (Smart, 1977, p. 96). Un muy buen ejemplo de adoptar la analogía del “enfermo” para comprender lo que se define como la motivación criminal es la transformación de *Holloway*⁹ de una prisión a un hospital psiquiátrico en el que las mujeres reciben tratamiento psiquiátrico relacionado más bien con sus “necesidades” psicológicas que con sus infracciones. La hipótesis que subyace a esta política es que, en el caso de las mujeres, la desviación criminal es prueba de un desequilibrio mental. De tal modo

⁹ Fue una prisión de mujeres en Londres, Inglaterra, que operó desde 1852 hasta su cierre en 2016. Sobre Holloway véase Matthews, Roger (2003), pp. 257-259.

que su condición de dependiente será usualmente confirmada y su capacidad de controlar o cambiar su estilo de vida será dañada (Smart, 1977, p. 96).

Todos estos mitos sobre la naturaleza fisiológicamente determinada de la delincuencia femenina acabaron por tener consecuencias efectivamente reales. “En los medios de comunicación, en la policía, en el sistema judicial, etc. Por ello aún recibirá la etiqueta de ‘loca’ más que la de ‘delincuente’: si una mujer infringe la ley es que algo no marcha bien en su cabeza” (Van Swaaningen, 1989, p. 86).

Un cambio de paradigma en este sentido, fue la emergencia de la **criminología feminista**¹⁰, que- desde mediados de los setenta - ha analizado la posición desigual de las mujeres en el derecho penal, tanto como autoras de delitos, como en cuanto víctimas de ellos (Bodelón, 2003, p. 452).

En relación a las mujeres infractoras, los primeros estudios que podrían ser considerados en la esfera de la criminología feminista, aparecieron el año 1975 con la publicación de *Sisters in Crime* de Freda Adler y *Women and Crime* de Rita Simon. Y aunque estos libros difieren ligeramente en cuanto al enfoque, ambos siguen el mismo argumento teórico general, y que ha llegado a ser conocido como la *teoría de la emancipación* (Britton, 2013, p. 41). Ambas autoras sostienen que las tasas más bajas de participación en actividades criminales por parte de las mujeres podría ser explicado por su confinamiento a roles domésticos y por la discriminación que limita sus aspiraciones y oportunidades (Britton, 2013, p.41).

Teniendo presente lo anterior, y cuando el número de niñas y mujeres detenidas en los Estados Unidos aumentó dramáticamente entre 1960 y 1975, a muchos/as les pareció que ello era consecuencia de la creciente y significativa “emancipación” que las mujeres habían experimentado en las últimas décadas. Adler señaló que el movimiento feminista había cambiado las actitudes tradicionales ante el comportamiento aceptable de las mujeres y también abrió oportunidades previamente no disponibles para las criminales femeninas. El movimiento había permitido a las mujeres ganar en la arena financiera y Adler creía que, también en la esfera criminal (Chesney Lind y Shelden, 2004, p. 126).

¹⁰ Se ha señalado que la fundación de la criminología feminista puede ser fijada –algo arbitrariamente– en el año 1976 con la publicación del libro de Carol Smart, *Women, Crimen and Criminology: A Feminist Critique*. Aunque un grupo de trabajos anteriores había abordado algunos de los temas generales que ella planteaba, el libro de Carol Smart los unió en una crítica sistemática al tratamiento de las mujeres “delincuentes” en las corrientes principales de la criminología y al abandono de las experiencias de las mujeres como víctimas en un intento de exponer algunas orientaciones para el nuevo campo de investigación feminista (Britton, 2013, p. 39).

Sin embargo, un examen cuidadoso de la evidencia disponible –usando tanto los datos de detenciones y de autoreportes- no muestra tal relación. En cambio, los estudios que preguntaron a las jóvenes delincuentes sobre sus actitudes en relación al género determinaron que las jóvenes infractoras exhibían actitudes más tradicionales en relación con el rol de la mujer (Chesney Lind, Meda y Shelden, Randall 2004: 130). Por ello es que Chesney Lind y Shelden sugieren que las teorías sobre la delincuencia femenina deben superar las construcciones de sentido común de la feminidad e ir hacia una apreciación más amplia del rol de las situaciones y vidas de las niñas y mujeres en sus problemas con el sistema de justicia penal (2004: 131).

En palabras de Maqueda: “estas criminologías del sentido común no contaban con los factores sociales estructurales que son determinantes del comportamiento desviado y de la reacción social y se habían olvidado de la autonomía de las mujeres” (2014: 16).

Sobre los factores que llevan a cometer delitos las niñas/adolescentes y las mujeres, es posible identificar – al menos -dos grandes explicaciones en las investigaciones feministas.

Por una parte se identifican razones económicas, en el sentido que la sociedad capitalista priva de poder a las mujeres, ellas se encuentran aisladas en la familia y tienen menos oportunidades de incurrir en delitos de “élite” y también se les niega el acceso a crímenes callejeros dominados por varones. Se sugiere que las mujeres tienen menos probabilidades de estar involucradas en la delincuencia grave. La falta de poder también aumenta la probabilidad de que las mujeres se vuelvan blanco de actos de violencia (Chesney Lind y Shelden, 2004, p. 130). Y “cuando las mujeres se dedican a la delincuencia, su actividad criminal suele ser una respuesta a su posición subordinada y sin poder en la sociedad patriarcal capitalista.” (Messerschmidt, 1993 en Regoli, Hewit y DeLisi, 2010: 333).

Por otra parte, se identifican razones sociales, en el sentido que la sociedad patriarcal históricamente ha dejado a la mujer en una situación de subordinación. Aquí las autoras se concentran en las fuerzas sociales que dan forma a las vidas y experiencias de las mujeres con el fin de explicar la delincuencia femenina. Por ejemplo intentan mostrar que la victimización física y/o sexual de niñas y mujeres puede estar bajo las causas del comportamiento criminal. La explotación de la mujer por el hombre opera como un detonante para el comportamiento en víctimas femeninas, incidiendo en que comiencen a usar drogas a temprana edad. Como ejemplo señalan que muchas niñas huyen de casa por el abuso de que han sido víctimas y ello las lleva a cometer sus primeros delitos.

En este sentido, y en cuanto a los distintos tipos de control de que son objeto las niñas, es posible afirmar que la supervisión puede resultar en menor delincuencia en algunas chicas, pero también puede alimentar la delincuencia de otras que se rebelan contra las restricciones tradicionales. Tal “control”, cuando toma la forma de abuso psíquico o sexual, es claramente una fuerza que causa la delincuencia de las niñas (Chesney Lind y Shelden, 2004).

5. Las mujeres privadas de libertad en Chile

De acuerdo a los datos estadísticos de Gendarmería¹¹, al 30 de julio de 2025, se registraban 5.268 mujeres privadas de libertad, lo que corresponde al 8,3% del total de personas privadas de libertad. Datos relativamente inferiores a diciembre de 2022¹² que ya situaban a Chile como el segundo país de América Latina con la más alta proporción de mujeres privadas de libertad, siendo precedido únicamente por Venezuela (7,8%) (Minjusticia, 2023).

Resulta especialmente alarmante la alta proporción de mujeres privadas de libertad en prisión preventiva, ya que casi la mitad de la población femenina encarcelada se encuentra en tal condición (Minjusticia, 2023)

Según los datos levantados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2023), en cuanto a las características sociodemográficas y criminológicas de las mujeres se observa lo siguiente:

- a) Edad: La mayor parte de las mujeres reclusas en Chile, tienen entre 20 y 39 años de edad.
- b) Nivel educacional: El nivel educacional declarado al ingreso por las mujeres privadas de libertad, da cuenta que un 58% de ellas, no había terminado el colegio (educación básica o media).
- c) Nacionalidad: La mayoría de las mujeres reclusas en establecimientos penitenciarios es de nacionalidad chilena. El 14,2% de las mujeres condenadas es extranjera, cifra que se duplica en el caso de las imputadas alcanzando un 29,7% del total de mujeres en prisión preventiva.
- d) Mujeres que tienen hijos(as): De acuerdo con la información remitida al 31 de enero 2023, se observa que de un total de N=3.423 mujeres privadas de libertad, un 84,7% de las mujeres condenadas y un 81,6% reporta tener hijos¹³.

¹¹ https://www.gendarmeria.gob.cl/est_general.html

¹² Al 31 de diciembre del año 2022, había 3.308 mujeres privadas de libertad, lo que correspondía al 7,2% del total de personas privadas de libertad (Minjusticia, 2023)

¹³ Según un estudio realizado por Paz Ciudadana el año 2016, el 91% de las mujeres privadas de libertad declaró ser madres, teniendo en promedio alrededor de 3 hijos cada una, muy por sobre el promedio nacional de 1,2

- e) Tipos de delitos: La mayoría de las mujeres condenadas se encuentra privada de libertad por delitos asociados con la ley de drogas (47,4%), luego por robos (28,3%), homicidios (9,2%), hurtos (8,4%), robos no violentos (8%), delitos de leyes especiales (7,9%) y faltas (7%). En el caso de mujeres imputadas, los tipos de delitos más comunes por los que se encuentran en prisión preventiva son: delitos de ley de drogas (66,6%), robos (12,8%), delitos de leyes especiales (6,8%) y homicidios (6,6%). Como lo señala el Ministerio de Justicia, “esto indica que la mayoría de las mujeres se encuentran reclusas en establecimientos penitenciarios por un delito asociado con la ley de drogas, sin embargo, esta proporción es mayor en el caso de las mujeres imputadas” (2023, p.18).
- f) En un estudio de trayectorias de vida de las mujeres privadas de libertad por delitos de la Ley 20.000: se concluyó que “las trayectorias de vida de las mujeres participantes del estudio se deben comprender en una estructura social inequitativa, donde las desigualdades de clase y de género son transversales a las experiencias de sus trayectorias. Todas las mujeres que participaron del estudio vienen de un contexto de adversidad y exclusión socioeconómica, el cual ha marcado las distintas etapas de su vida” (Rodríguez, et.al., 2024, p.22).

Y en cuanto a los hitos en sus trayectorias de vida que han sido críticos para su involucramiento delictual, destacan “la adversidad el vivir en hogares con dinámicas de bajo grado de funcionalidad, donde no solo tenían precariedad material, sino que también muchas enfrentaron negligencia y abandono parental, vivieron el fallecimiento de un adulto significativo con profundas consecuencias para la dinámica del hogar, fueron testigos o víctimas de violencia, y estuvieron expuestas a conductas de riesgo e inestabilidad residencial y de cuidado (...) también el embarazo durante la niñez, adolescencia o adultez joven, donde no existe un padre que también se haga cargo o bien, enmarcados en dinámicas nocivas e inestables de pareja, donde muchas veces sufren violencia de género.(...) y la adquisición temprana de responsabilidades en los roles y estereotipos de género: desde niñas o jóvenes deben cuidar los trabajos domésticos y crianza en sus casas, ya sea de personas dependientes de su familia o de sus propios hijos” (Rodríguez, et.al., 2024, p.22).

Como ya se ha señalado previamente, lo anterior sólo confirma lo que han señalados diversos estudios, en el sentido que las trayectorias de vida de las jóvenes y mujeres privadas de libertad

hijos por mujer según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y conforme al estudio realizado por el Centro de Justicia y Sociedad, el año 2021 un 89,4% de las mujeres que participaron son madres y/o están embarazadas en el momento previo al egreso de la cárcel, con un promedio de 2,5 hijos por mujer.

se caracterizan por la presencia de maltrato, orfandad, precariedad económica, abuso sexual, consumo problemático de drogas y alta prevalencia de relaciones afectivas con varones vinculados al sistema carcelario (Aedo, 2023).

6. Principales problemáticas y necesidades de las mujeres privadas de libertad en Chile

A continuación, se presentan las principales problemáticas y necesidades de las mujeres privadas de libertad, fundamentalmente identificadas en el *Protocolo para la defensa penitenciaria de mujeres condenadas privadas de libertad en Chile*, elaborado por la Defensoría Penal Pública/Eurosocial, y del que participé como investigadora nacional (2019). Lo anterior se complementará con algunas reflexiones desarrolladas a propósito de la deficiente atención de salud de las mujeres encarceladas.

El referido Protocolo, contó un primer Diagnóstico¹⁴ que identificó diversas problemáticas y necesidades de las mujeres, que se clasificaron en dos grandes grupos, a saber, aquellos en relación con su situación penitenciaria, por una parte, y la defensa penitenciaria, por otra.

En relación con su situación penitenciaria, cabe mencionar:

- a) Limitaciones al acceso a capacitaciones y otros talleres: en los *focus group* desarrollados, las internas solicitan una mayor oferta laboral al interior de la unidad penal, como postulaciones a Centros de Educación y Trabajo (C.E.T.) cerrado y semi-abierto.
- b) Ausencia de infraestructura adecuada: sobre la infraestructura carcelaria, se advierte que el diseño, lógica y cultura de las cárceles, está previsto para los varones, así por ejemplo, se aprecia que en algunos complejos como el de Valparaíso, la Biblioteca del Centro -destinada en teoría a toda la población- está ubicada en la sección masculina, al igual que el único módulo que ofrece formación técnica universitaria. De este modo, y en opinión de las mujeres entrevistadas

¹⁴ Cabe señalar que para llevar a cabo el Diagnóstico se desarrolló una metodología cualitativa, en el que se llevaron a cabo entrevistas y *focus group*. Entre los destinatarios de las entrevistas destacaron equipos de defensa penitenciaria, representantes del Poder Judicial, funcionarios/as del Instituto de Derechos Humanos, equipo directivo de la ONG Mujer Levántate, académicos/as destacados/as en la materia, funcionarios de la Defensoría Nacional y Defensorías Regionales. En cuanto a los grupos focales, se realizaron en total 9 grupos focales con las mujeres encarceladas. 3 grupos en el Complejo Penitenciario Femenino (CPF) de Valparaíso, 3 en el CPF de San Joaquín y 3 en el CPF de Rancagua, y en cada caso se solicitó a Gendarmería de Chile tres grupos diferenciados por módulos buena conducta, mala conducta y mujeres embarazadas y/o con mujeres lactantes. En total participaron 71 mujeres. Se realizaron *focus group* con el equipo de la defensa penitenciaria de las regiones Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana. Además de videoconferencias con los equipos regionales de la región de Tarapacá, Bio Bio y Magallanes.

para el presente estudio “los hombres tienen más posibilidades de hacer conducta porque tienen más talleres, inclusive tienen módulos que están asesorados por el gobierno, hacen rehabilitación (...) (*focus group*, CPF).”

- c) Limitaciones y vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos: ausencia de productos básicos de higiene relacionados a sus ciclos menstruales y la restricción de los referidos derechos (atención ginecológica, control de natalidad y restricción a las visitas). En el diagnóstico realizado, se hace patente la existencia de abusos en allanamientos, tales como registros vaginales para detectar droga, entre otros. En cuanto a programas de salud (dentales, chequeos médicos rutinarios), en general éstos no son practicados, advirtiéndose en este punto una deuda conforme lo dispuesto en la normativa internacional. Se aprecia que, en algunas oportunidades, la asistencia a las internas se obtiene por gestiones de la defensa o del núcleo familiar.
- d) Vulneraciones a la dignidad de sus hijos/as y familiares en las visitas: respecto a las visitas que reciben, las mujeres y algunos actores claves entrevistados señalan que no existe un protocolo de visitas, especialmente respecto niñas y niños menores de 12 años, presentándose en algunos casos graves vulneraciones respecto de éstos, cuando son expuestos a revisiones intrusivas. Ello, en ciertos casos, implica que sus familiares desistan de mantener las visitas, e incluso algunas mujeres reclusas prefieren que- en tales condiciones- sus hijos/as no regresen a visitarlas.
- e) Requerimiento de asistencia jurídica en derecho de familia: algunos actores claves entrevistados señalaron además que en algunos casos los tribunales de familia sólo consideran a los hijos/as, sin otorgar la calidad de interviniente a la madre privada de libertad y tratan a ésta como una persona que no cuenta con las habilidades parentales adecuadas. Sobre el tratamiento que reciben de algunos tribunales de familia, las mujeres reclusas consideran que tanto como madres y como mujeres se vulneran sus derechos “y el derecho más fuerte que es el de mamá” (*focus group*, CPF). Se trata de una cuestión especialmente compleja tanto en lo relativo al acceso a la justicia como a la revictimización de que pueden ser objeto en su tránsito por el sistema de justicia.
- f) Dificultad de acceso a beneficios intrapenitenciarios: la exigencia de informes sociales que se basan en redes de apoyo, lo que resulta una contradicción, toda vez que en general las mujeres privadas de libertad cuentan con poco soporte externo, incluso siendo abandonadas por sus parejas u otras redes familiares. El obstáculo general en este sentido es paradójicamente la

exigencia de talleres que la unidad penal no está en condiciones de entregar a la generalidad de la población, especialmente en el caso de las mujeres, es decir, se exige un requisito que -en muchos caos- no se está en condiciones materiales de cumplir.

- g) Discriminación por opción sexual o identidad de género: de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los/as internos/as pertenecientes a la llamada diversidad sexual y que se conocen o definen como personas gay, lesbianas, transexuales y transgénero, constituyen un grupo que es duramente discriminado al interior de las prisiones chilenas.
- h) Registros corporales intrusivos: esta práctica puede tener un efecto traumático en las internas, ya que no solo suelen ser humillantes, sino también algunas reclusas han sufrido previamente violencia sexual, con lo cual esta rutina las afecta en su integridad física y psicológica en mayor medida.
- i) Dificultades en el desarrollo de maternidad y precarización de sus vínculos familiares: Tal como dice una mujer que participó del focus group *“yo creo que en ese sentido tanto como madre y como mujer(...)te están vulnerando tus derechos porque el hecho de que tú estés presa se te vulneran todos tus derechos”(...)* y el *derecho más fuerte que es el de mamá(...)*” (Mujer CPF, módulo “mala conducta”). Otro de los requerimientos más comunes entre las mujeres condenadas privadas de libertad está relacionado particularmente con su rol de madres y sus vínculos familiares. Existe un desarraigo familiar que conlleva la privación de libertad y también una imposibilidad de estar junto a sus hijos. En este sentido, la privación de libertad trae aparejada para las mujeres consecuencias colaterales más graves que los hombres internos no resienten en general. (Encuesta Defensoría).

Conscientes de esta diferenciación que se presenta, en cuanto a las visitas por ejemplo, ellas saben que son mucho menos frecuentes que en relación a sus pares masculinos.

En palabras textuales señalan: *“no siempre tenemos quien nos apoye afuera. En mi caso me cuida el hijo el papá de él y en parte de lo que tengo de mi familia”*. En esta misma línea, otra interna agrega: *“el apoyo que tengo es de la capilla, mi familia apoya del corazón”*. Otra interna dice: *“mis hijos son grandes, están casados, viven afuera, no vienen a visitarme”*. Al unísono recalcan que: *“como internas nos apoyamos, aunque a veces peleamos”*. (Focus CPF, Módulo “mala conducta”).

Por otra parte, las horas de contacto con sus familiares pueden resultar insuficientes para mantener la estabilidad familiar (muchas de ellas eran la principal proveedora del grupo familiar antes de ingresar a prisión), sobre todo respecto de aquellas que son madres (cuyos hijos/as están en libertad) (Encuesta Defensoría)

Por último, ello impacta en aspectos tan fundamentales como el acceso a útiles de aseo básicos (Actor clave CPF San Joaquín).

- j) Mujeres embarazadas: Éstas señalan que no existe un protocolo a seguir en el proceso de parto. Relatan que hay mujeres que presentan síntomas que indican que va a empezar el trabajo de parto, pero al no estar presente alguna matrona y al retrasarse su traslado hacia algún hospital, las gendarmes las llevan a enfermería para que alguna enfermera las revise. Asimismo, se han presentado diversos casos de mujeres que han dado a luz engrilladas en conformidad a los protocolos de Gendarmería, como el caso de Lorenza Cayuhan, que se verá más adelante. Incluso -señalan- que hubo un caso donde una mujer tuvo a su hijo “*en una toalla envuelta*”. En este sentido las reclusas señalan que la experiencia de la maternidad dentro de la cárcel “*se vive de manera denigrante*” (Focus CPF - madres).

En esta misma línea, una reclusa extranjera señaló que el año pasado tuvo a su hijo engrillada, siendo el doctor quien requirió a los gendarmes que le sacaran las esposas para empezar el trabajo de parto, siendo engrillada nuevamente una vez concluido el proceso. Un par de horas después procedió a amamantar a su hijo engrillada, siendo la teniente -esta vez- quién solicitó que le sean retirados los grilletes (Focus CPF - madres).

- k) Mujeres con hijos/as lactantes: ellas manifiestan que no existe un protocolo médico en el evento que sus hijos se enfermen. A “lo sumo, cuando presentan fiebre o vómitos, un paramédico los revisa limitándose a suministrarle viadil en algunos casos. Si la fiebre continúa, el paramédico o la gendarme de turno están obligados a tramitar la salida del niño para que algún familiar pueda llevarlo hacia algún centro médico o brindarle los cuidados necesarios en su respectivo hogar...”. En este sentido todas manifestaron preocupación por la precaria atención médica que existe para sus hijos, ya que “*si se enferma uno, se enferman todos*” (Focus CPF - madres).
- l) Relación maternidad- embarazo y privación de libertad: Uno de los mayores problemas detectados se vincula con la relación entre maternidad-embarazo y privación de libertad. Se plantea la necesidad de “*medidas alternativas a la privación de libertad en estos casos*” (Encuesta Defensoría). En Chile “*no existen políticas públicas que promuevan la excarcelación de mujeres que tienen el cuidado de niños/as pequeños/as como en otros países y se les dificulta la visita a hijos que se encuentran hospitalizados en hospitales externos a las unidades penales*” (Encuesta Defensoría). Además, se reitera en este caso la falta de redes y familias que estén dispuestas a apoyar en el proceso, en este

sentido “es poco habitual contar con familiares que colaboren con la defensa” (Encuesta Defensoría).

Se destaca la *“falta de apoyo en la crianza de sus hijos lactantes, ya que deben estar pendientes de ellos en todo momento”* (Encuesta Defensoría). Esto pues *“si bien existen jardines infantiles para las mujeres que pernoctan en las unidades penales, los horarios no siempre permiten que las internas puedan acceder a talleres o trabajar”*. (Encuesta Defensoría).

7. Sistema Penitenciario en Chile: hacia el desarrollo y la implementación de una política y justicia con enfoque de género

7.1. Antecedentes

En Chile no existe una ley de ejecución penitenciaria ni un juez de ejecución de pena. La regulación está dada principalmente por Reglamentos. Asimismo, se ha determinado que en este cuerpo de normas reglamentarias: “...Solo existen dos referencias específicas a la llamada actividad penitenciaria femenina, la primera, referida a la necesidad de crear establecimientos penitenciarios separados en función del sexo, y la segunda, dedicada a la función reproductora de las mujeres (...)” (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 2006).

El sistema penitenciario chileno ha evolucionado muy poco, ya que: “los esfuerzos por mejorar han debido priorizar a la mayor proporción de reclusos hombres, en detrimento de las secciones femeninas. Paralelamente, los criterios de gestión aplicados por la administración penitenciaria aún denotan una evidente falta de perspectiva de género” (Gendarmería, 2015:11).

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar los esfuerzos institucionales que se han hecho especialmente desde el Ministerio de Justicia, tanto al convocar a Mesas para generar una Política penitenciaria con Enfoque de Género (2013), trabajo liderado por la exministra Patricia Pérez G. y el Plan de trabajo condiciones carcelarias de mujeres privadas de libertad publicado el año 2023, liderado por el exministro Luis Cordero V. Consideramos que se trata de dos lineamientos institucionales que han buscado abordar la precaria o ausente perspectiva de género en el sistema penitenciario, cuyos objetivos debiesen ser asumidos como una política de Estado. Lamentablemente su análisis excede los objetivos del presente trabajo.

7.2. Marco jurídico internacional: hacia una política y justicia penitenciaria con enfoque de género

Como se ha señalado al principio de este trabajo existe un marco jurídico internacional indispensable en materia de violencia y discriminación cuyo núcleo duro está constituido por la CEDAW y la Convención de Belem do Pará.

En relación a la discriminación específica que sufren las mujeres en el sistema penitenciario, ello también ha sido reconocido recientemente por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En primer lugar, destacan las Reglas de Brasilia (2008) que reconocen a las mujeres, en general, y a las mujeres privadas de libertad, en especial, como grupo en situación de vulnerabilidad e incorpora el género como una variable a ser considerada.

Especialmente significativa en esta materia ha sido la adopción de las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (en adelante, Reglas de Bangkok), por la Asamblea General de Naciones Unidas en marzo de 2011.

En general, estas recomendaciones instan a los Estados para que tengan en consideración las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres reclusas al elaborar la legislación, los procedimientos, las políticas y los planes de acción correspondientes, y a que utilicen, según corresponda, las Reglas de Bangkok.

Si los Estados no toman en cuenta estas particularidades, ello constituye discriminación en los términos del artículo 1º de la CEDAW. Así lo ha señalado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante, Comité de la CEDAW) en diversas oportunidades.

Sobre esta materia y en relación con el Estado de Chile el Comité de la CEDAW ha expresado su enorme preocupación por la difícil situación en la que se encuentran las mujeres que están en prisión, en particular a la hora de acceder a instalaciones y servicios de salud adecuados.

Asimismo, considerando las Reglas de Bangkok, el Comité ha exhortado al Estado para que vele por que la **reforma del sistema penitenciario incluya una perspectiva de género** y prevea

instalaciones y servicios de salud adecuados, incluido el acceso a la atención obstétrica y ginecológica, junto con servicios para todas las mujeres privadas de libertad del país¹⁵.

Consideramos que un **sistema penitenciario con enfoque de género** debe considerar que las desigualdades que viven las mujeres en general y las privadas de libertad en particular son condicionantes sociales y culturales previas al ingreso a prisión.

La cárcel tiene un impacto diferenciado para la mujer, para ella la censura social es mayor, lo que vuelve su institucionalización mucho más dolorosa y estigmatizante, en especial por los conflictos producidos por la separación de su familia y particularmente de sus hijos, situación que acentúa los estados depresivos y los sentimientos de culpabilidad.

A diferencia de los varones, ser delincuente y haber estado en prisión es doblemente estigmatizador para ellas, porque no sólo contradicen la norma penal sino los estereotipos de lo que la sociedad espera de una “buena mujer” (DPP/Eurosocial, 2019).

Además se debe tener presente un abordaje interseccional, ya que la exclusión de género se construye en vinculación con otras exclusiones, tales como la clase, etnia, estatus migratorio, opción sexual, identidad de género y capacidades diversas, entre otras (Antony, 2000; Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, 2015; Bodelón, 2011).

7.3. Justicia Penitenciaria con enfoque de género: Casos Jurisprudenciales

Cabe destacar los siguientes casos jurisprudenciales internacionales y nacionales que han aplicado un enfoque de género y derechos humanos, que son referentes en materia penitenciaria.

-Caso Penal Miguel Castro Castro v. Perú, fecha de emisión 25-11-2006, Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH).

En cuanto a los hechos: del 6 al 9 de mayo de 1992, durante el “Operativo Mudanza 1”, la policía y unidades especializadas del ejército peruano, bombardearon con armamento militar los pabellones 1A y 4B del Penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, con el objetivo de eliminar a las 135

¹⁵ En este sentido, véanse las “Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile”, publicadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas el 14 de marzo de 2018. Disponibles en: <http://acnudh.org/wp-content/uploads/2018/07/N1807016.pdf>

mujeres consideradas por el Gobierno de Fujimori como terroristas. Las víctimas supervivientes, fueron sometidas a diferentes formas de tortura y violencia sexual.

En esta decisión, por primera vez la Corte IDH examina una denuncia usando conjuntamente la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belem do Pará. Esto constituye un paso importantísimo en la protección de los derechos humanos de las mujeres dentro del sistema interamericano, ya que la competencia de la Corte para vigilar el cumplimiento de la Convención de Belem do Pará no es expresa. A partir de esta sentencia, esta competencia ya no está en discusión.

El Tribunal sienta un precedente importante al examinar el impacto diferenciado que la violencia ejerce sobre hombres y mujeres, y valorando como particularmente graves los actos de humillación y violencia sexual, que son una forma de tortura. La Corte realiza este análisis, no sólo porque las mujeres fueron el principal objeto del ataque, sino también, porque la violencia estuvo dirigida directamente a afectarlas en función de su género.

-Caso Embarazo Gemelar, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso¹⁶

Cabe destacar la Resolución de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió una acción constitucional de amparo presentada por un defensor penitenciario (Humberto Romero) a favor de una mujer que se encontraba en su vigésima semana de embarazo gemelar de alto riesgo privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota, condenada a la pena efectiva de cinco años y un día por el delito de robo con violencia. La acción constitucional fue presentada contra el Sr. Juez de garantía de San Antonio, quien no dio lugar a la solicitud formulada por la defensa penitenciaria en orden a que se interrumpiera la pena privativa de libertad reemplazándola por la pena de reclusión domiciliaria total. El juez señaló al efecto que: “no existía en el derecho chileno norma alguna que lo facultara para ello, pues el indulto aún no era promulgado”.

La Iltrma. Corte acogió la acción constitucional, por fallo redactado por la Ministra Silvana Donoso, y ordenó la suspensión del cumplimiento efectivo del saldo de pena, sustituyendo dicha forma de satisfacción de la sanción, por la reclusión total domiciliaria, señalando que la petición debía examinarse desde una perspectiva de género (considerando primero), y que en tal sentido, debía tenerse presente

¹⁶ Sentencia Rol N°256-2020, dictada el 07 de abril de 2020 por la Iltrma. Corte de Apelaciones de Valparaíso.

la normativa internacional, como la CEDAW y la Convención Belem do Pará, instrumentos que debían colacionarse con las Reglas de Bangkok (considerando segundo).

-Caso Lorenza Cayuhán¹⁷

La discriminación que viven las mujeres en el sistema penitenciario, en especial cuando están embarazadas, ya había sido relevado por nuestra Excelentísima Corte Suprema, la que, “conociendo de una apelación, el 1 de diciembre de 2016 (en adelante, la Corte) acogió el amparo interpuesto en favor de Lorenza Cayuhán, el cual había sido desestimado por la Corte de Apelaciones de Concepción. La Corte determinó que el uso de medidas de coerción en el traslado y parto de la reclusa había constituido un trato degradante y violento por parte de los funcionarios penitenciarios, configurándose un acto de discriminación en contra de Lorenza, en su condición de mujer” (Pérez, 2017).

En concreto, la Corte estableció dos vulneraciones esenciales. En primer lugar, estimo que Gendarmería a había lesionado la dignidad de la amparada mediante conductas constitutivas de un trato degradante. (...) Y en segundo lugar, determinó que la institución penitenciaria había atentado contra el derecho a vivir una vida libre de violencia, señalando la Corte que “el Estado ha transgredido la obligación de proteger a la amparada de la violencia ejercida por funcionarios de Gendarmería, al permitir que aquella que se encontraba una especial condición de vulnerabilidad, dado su estado de embarazo y su privación de libertad, fuera sometida a tratos vejatorios que debieron evitarse” (considerando doce) .

Como señala Patricia Pérez, la decisión de la Corte Suprema en el caso de Lorenza Cayuhán es de extraordinaria importancia. Y menciona tres aspectos de especial relevancia jurídica: (i) es un ejercicio del control de convencionalidad, (ii) es un ejemplo de identificación de interseccionalidad en la discriminación y por último, (iii) hace patente la necesidad de considerar la perspectiva de género en el ámbito penitenciario (2017, p. 83).¹⁸

8. Reflexiones finales

¹⁷ Sentencia Rol N° 92.795-2016, dictada el 1 de diciembre de 2016 por la Excelentísima Corte Suprema.

¹⁸ La historia de Lorenza Cayuhán sirvió de antecedente para la tramitación del Proyecto de Ley Sayén Boletín N° 11073-07, en virtud del cual se busca dar prioridad a medidas no privativas de libertad para las mujeres embarazadas (y con hijos/as lactantes) imputadas y condenadas.

El objetivo principal del trabajo ha sido caracterizar la discriminación y las múltiples violencias que viven las mujeres privadas de su libertad. En este sentido, los estudios revisados muestran como ellas desde antes de su ingreso presentan trayectorias de vida marcadas por la violencia/discriminación, que luego se reproduce en el sistema penitenciario, especialmente en la limitación en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Se revisaron algunas de las reflexiones que se han planteado desde la criminología feminista, la que desde mediados de los años setenta del siglo XX ha denunciado la invisibilización y la discriminación de las mujeres infractoras en el sistema penal, respecto de quienes han operado – históricamente- un conjunto de estereotipos que, entre otros aspectos, las han calificado de mala mujer, mala madre, prostituta, de comportamiento sexual promiscuo, doblemente infractoras (de la norma penal y de la norma social de buena mujer), etc.

Lo anterior ha sido considerado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que ha recogido en diversos instrumentos internacionales, especialmente en las Reglas de Bangkok, los estándares con los que debe abordarse su trato diferenciado.

Lamentablemente ello no se ha proyectado en el Derecho Interno, en este sentido han sido enfáticas las recomendaciones del Comité de la CEDAW, que ha señalado la necesidad de

que el Estado de Chile incorpore la perspectiva de género en el sistema penitenciario, y en particular, provea de servicio de salud a las mujeres privadas de libertad.

Por último, en relación con la Ley N° 21.675 que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, (en adelante, la Ley) me parece necesario relevar las siguientes dimensiones que, sin duda, contribuyen en fortalecer el estatus normativo de esta población:

-Mujeres privadas de libertad como grupo en especial situación de vulnerabilidad: el artículo 1° inciso tercero de la Ley señala: “Para alcanzar esos objetivos, esta ley regula medidas de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, y considera especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse”. Este apartado debiese ser aplicable a las mujeres privadas de su libertad, en atención a su especial situación de vulnerabilidad.

-Principios de debida diligencia e igualdad y no discriminación: el artículo 3º, en relación a los artículos 22 y 30, referido a los principios, en especial al de debida diligencia e igualdad y no discriminación, los que deben ser invocados toda vez que una mujer sufre violencia al interior de un recinto penitenciario, de este modo el Ministerio Público debiese actuar con la mayor celeridad en caso de recibir una denuncia en esta materia.

-Políticas Penitenciarias: a la luz del artículo 8º los órganos del Estado en el marco de sus competencias adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Promover en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.

En este sentido entiendo, por ejemplo, el Ministerio de Justicia deberá seguir liderando una política penitenciaria con enfoque de género y derechos humanos con el fin de evitar las violencias que puedan sufrir las mujeres en el sistema penitenciario, incluso promoviendo medidas alternativas a la privación de libertad, en especial cuando las mujeres estén embarazadas y/o tengan hijos pequeños o sufran de trauma complejo o stress postraumático producto de las violencias de las que ha sido víctima¹⁹.

También se debiese desarrollar con más fuerza la necesidad de que las intervenciones socio educativas en contexto privativo de libertad adopten este enfoque. Y que el Estado asuma el deber de reparación cuando una mujer privada de libertad ha vivido violencia de género, en especial trauma complejo y/o stress postraumático producto de los abusos de que ha sido víctima²⁰.

-Administración de Justicia: el mismo artículo 8º que promueve el enfoque de género y derechos humanos señala en su número 3 la necesidad de fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los

¹⁹ El historial de victimización de las mujeres debe ser considerado en la determinación de la forma de cumplimiento de las medidas cautelares o condenas, privilegiando aquellas en medio libre (Regla 57, Reglas de Bangkok).

²⁰ Las mujeres, adultas y niñas, víctimas de violencia tienen derecho a tener acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (art. 7 letra g, Belém do Pará) y que se les provea servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia (art. 8 letra d, Belém do Pará) (en relación con artículo 39 CIDN). Asimismo, el Estado debe disponer de oferta que responda a las necesidades de salud mental de las mujeres privadas de libertad, “(...) programas amplios de atención de salud y rehabilitación individualizados, que tengan en consideración las cuestiones de género y estén habilitados para el tratamiento de los traumas.” (Regla 12, Reglas de Bangkok; Artículo 19 N°2 CIDN)

sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres o exacerbén la violencia en contra de ellas.

Sobre el particular los estudios e investigaciones revisadas en el presente trabajo dan cuenta de los prejuicios y estereotipos respecto de las mujeres privadas de libertad y como ello impacta en el trato que se les puede dar desde el Poder Judicial y, en general, en el acceso a la justicia, por ejemplo, negándole su calidad de interviniente, asumiendo en cualquier caso su falta de habilidad para el cuidado de sus hijos/as o negar derechamente alguna relación directa y regular con ellos/as. Es un desafío no sólo para la administración de justicia sino para toda la sociedad. Al mirarlas y tratarlas libres de prejuicios y estereotipos- como señaló en alguna oportunidad la Ministra Andrea Muñoz²¹ - les devolvemos su dignidad.

Bibliografía

Aedo, Marcela (2022), *Adolescencia femenina y control penal*, ediciones Didot, Buenos Aires.

Aedo, Marcela (2023). “Las violencias que afectan a las adolescentes y jóvenes privadas de libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente: un análisis a la luz del caso chileno”, en *Injusticias de género*. Heim, Daniela (Compiladora). Didot, Buenos Aires. pp. 333-354.

Almeda, Elisabet (2001). *Corregir y castigar. El ayer y hoy de las cárceles de mujeres*, Editorial Bellaterra, Barcelona.

Almeda, Elisabet y Bodelón, Encarna (2007). *Mujeres y Castigo. Un enfoque socio-jurídico y de género*, Editorial Dykinson, Madrid.

Almeda, Elisabet y Dinella, Dino (2017). “Mujeres y cárceles en América Latina. Perspectivas críticas y feministas”, en *Papers* 2017, 102/2.

Antony, Carmen (2000). *Las mujeres confinadas*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago.

²¹ Véase entrevista de la Ministra Andrea Muñoz a propósito del caso Lorenza Cayuhán. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Gj0pg_AVO88&t=57s

Antony, Carmen (2005). Estudio sobre violencia de género: Mujeres transgresoras, Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá.

Añón, María José (2021). “La violencia contra las mujeres como discriminación”, en Revista de la Facultad de Derecho de México Tomo LXXI, Número 280, Mayo-Agosto 202, pp. 617-653.

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (2015). Manual Regional: las Reglas de Bangkok en clave de Defensa Pública. Madrid: Eurososocial.

Barrère, María Ángeles (2014). El derecho antidiscriminatorio y sus límites. Especial referencia a la perspectiva iusfeminista. Lima: Editora y Librería Jurídica Grijley.

Bodelón, Encarna (2003). “Género y sistema penal: los derechos de las mujeres en el sistema penal”, en Bergalli, Roberto (coord. y colaborador), en *Sistema penal y problemas sociales*, Editorial Tirant lo Blanch Alternativa, Valencia, pp. 451/486.

Bodelón, Encarna (2012). “La Violencia Contra las Mujeres en Situación de Prisión”, *Revista EMERJ*, Río de Janeiro, v. 15, n° 57, Edição Especial, enero-marzo, pp. 111/129.

Britton, Dana (2013), “Feminism in Criminology: Engendering the Outlaw”, en Chesney-Lind, Meda y Pasko, Lisa (editors), *Girls, Women and Crime. Selected Readings*, Sage, Los Ángeles, pp. 39-51.

Carranza, Elías (2012). “Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer?”, en Anuario de Derechos Humanos 2012, Costa Rica.

Charlesworth, Hilary (1997). “¿Qué son los “derechos humanos internacionales de la mujer”, en: Cook, Rebecca (ed.), *Derechos humanos de la mujer: perspectivas nacionales e internacionales*. Bogotá: Profamilia, pp. 55-80.

Chesney-Lind, Meda y Shelden, Randall G. (2004), *Girls, Delinquency, and Juvenile Justice*, Wadsworth Publishing, UK.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (2006). Mujeres privadas de libertad. <https://cejil.org/es/mujeres-privadas-libertad-informe-regional-argentina-bolivia-chile-paraguay-y-uruguay>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2023). Mujeres privadas de libertad en las Américas. Washington D.C.: CIDH.

Defensoría Penal Pública/Eurosocial (2019). Protocolo para la defensa penitenciaria de mujeres condenadas privadas de libertad en Chile, DPP, Madrid.

Gendarmería de Chile (2015). Informe de prevalencia de violencia de género en la población penal femenina de Chile. Disponible en: <https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/vgenero.pdf>

Consortio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) (2013). Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina. Londres: IDPC.

Maqueda, María Luisa (2014). “El peso del género y otras identidades culturales en la criminalización de las mujeres”, Transjus Working Papers-Publications, pp. 1-34.

Mestre, Ruth (2017). “Las MGF como una forma cultural de violencia contra las mujeres en el Convenio de Estambul”, Revista Europea de Derechos Fundamentales, primer semestre, 29, 2017, pp. 207-208.

Ministerio de Justicia Chile (2013). Política Penitenciaria con Enfoque de Género. Santiago: Ministerio de Justicia.

Ministerio de Justicia Chile (2023). Plan de trabajo condiciones carcelarias de mujeres privadas de libertad. Santiago: Ministerio de Justicia.

Miralles, Teresa (1983). “La mujer: el control informal”, en Bergalli, Roberto y Bustos, Juan (directores), El pensamiento criminológico, Estado y control, vol. 2, Editorial Temis, Bogotá, pp.121-148.

Pavarini, Massimo (1983). Control y dominación, Siglo XXI de España Editores.

Paz ciudadana (2016). “*Estudio sobre los niveles de exclusión social en personas privadas de libertad*”. <http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2016/02/exclusion-social-final-3.pdf>

Pérez, Patricia (2017). “Discriminación: el caso de Lorenza Cayuñán”, Revista de Ciencias Sociales, Número 70 (2017), Universidad de Valparaíso, pp. 75-94.

Regoli, R., Hewit, J. y De Lisi, M. (2010). *Delinquency in society*, Jones & Barlett Publishers.

Rodríguez, Jacinta; Osorio, Victoria; Rufs, Catalina; Carvacho, Pablo y Droppelmann, Catalina (2024). *Trayectorias de vida de las mujeres privadas de libertad por delitos de la Ley 20.000*. Centro de Estudios Justicia y Sociedad, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licitación publicada encargada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile.

Smart, Carol (1977). "Criminological theory: Its ideology and implications concerning women", *British Journal of Sociology*, vol. 28(1), pp. 89-100.

Valenzuela, Cecilia (2020). *El principio de igualdad entre los padres. Fundamentos desde las teorías jurídicas feministas*. Tesis Doctoral en Derecho por la Universidad Diego Portales, Chile. No publicada.

Van Swaaningen, René (1989). "Feminismo, criminología y derecho penal: una relación controvertida", *Papers d'Estudis i Formació*, nº 5, Barcelona, pp. 85-106.

Zaffaroni, Eugenio Raúl (1993). "La mujer y el poder punitivo", en ILANUD, *Sobre patriarcas, jerarcas, patrones y otros varones. Una mirada género-sensitiva de derecho*, ILANUD, San José, pp. 89-99.